

MARRUECOS Y EL 11-M

PEDRO ROJO

PARECE que ya nadie discute la conexión entre el 11-M y el 16-M, la cadena de atentados suicidas que el 16 de mayo de 2003 costó la vida en Casablanca a 45 personas (de las cuales 12 eran camicaces). Lo que queda por determinar es el grado de esta conexión y las lecturas que hacen de ellas los responsables de ambas orillas del estrecho de Gibraltar.

A los pocos días de producirse los atentados de Madrid la prensa marroquí recordaba que algunos de sus autores materiales eran prófugos de la justicia marroquí con orden de búsqueda y captura internacional por tener relación con el 16-M. Entre ellos Yamal Zugam, investigado y puesto en libertad por la policía española por falta de pruebas. La misma persona de la que se grabaron cintas y cintas de conversaciones telefónicas pero que nunca fueron analizadas por falta de personal que conociese el dialecto marroquí. Y es que la falta de confianza de los cuerpos de seguridad españoles en sus homólogos marroquíes perduró incluso tras los atentados de Madrid, como denunciaron en varias ocasiones los componentes de las delegaciones de expertos marroquíes que viajaron a España a ayudar en las investigaciones.

Si finalmente se vinculan los dos atentados a través del Grupo de Combatientes Marroquíes (creado en 1998 como una estructura de apoyo logístico, pero que pasó a la acción armada directa a finales de 2002. Su fundador y líder, *Abu Isa*, vive con toda normalidad en Londres) la evolución sería significativamente peligrosa. El 16-M de Casablanca se puede calificar casi de atentado case-

ro realizado con bombas fabricadas con fórmulas sacadas de *internet* a partir de productos básicos y que necesitó de un gran número de suicidas para cometerlos. En los atentados del 11-M de Madrid se usó ya explosivo profesional y la sofisticación de los móviles como detonadores les liberó de la necesidad de usar camicaces para lograr un resultado cuatro veces más mortal que en Casablanca.

Independientemente de si el hecho de que en el 16-M se atentase contra el restaurante privado Casa de España, en cuanto a emblema español, o porque lo frecuentaban jueces marroquíes que habían condenado a islamistas, parece claro que la elección de todos los objetivos donde hubo víctimas, además del restaurante español, un hotel de capital kuwaití y un centro judío, tienen relación con la situación de opresión ocupación que vive el mundo árabe en general y Palestina e Iraq en particular. Y es que una vez asumida la barbaridad que han significado estos dos atentados nadie parece haberse detenido a preguntarse qué hace que el Grupo de Combatientes Marroquíes decida pasar a realizar atentados y sobre todo haya conseguido reclutar a tantos voluntarios para morir por su causa.

En Marruecos la respuesta podría venir del peligroso cóctel de pobreza, marginación y falta de perspectivas de los jóvenes, lo que creo las condiciones propicias para que un grupo de jóvenes cada vez más numeroso se vea atraído por el discurso de los grupos que revolotean alrededor de al-Qaeda. La respuesta de las autoridades marroquíes para combatir este fenómeno es inquietante. Nadie quiere mirar a las raíces del problema, se contentan con cortar las ramas más frondosas, a saber, detener, encarcelar, y en ocasiones

varios ejes básicos que se han ido desarrollando y ampliando en posteriores fases negociadoras. El primer avance fue en materia de seguridad y militar: en septiembre de 2003 se firma el acuerdo para la creación de tres ejércitos (uno del norte, otro del sur y un tercero mixto) y la búsqueda de una nueva doctrina militar que prescindiera de los conceptos de *yihad* y de liberación. En enero de 2004 le tocó el turno al reparto de la riqueza y especialmente de los beneficios del petróleo, repartidos *casi* a partes iguales entre Jartum y la futura administración autónoma del sur. La última etapa, y la más espinosa, comenzó el pasado mes de febrero en Nivasha (Kenia) y abordó, junto a otros, los tres temas que más diferencias suscitaban: el reparto de la autoridad, la situación de las tres zonas llamadas *marginadas* y el estatuto de Jartum ligado a la relación entre religión y estado. El poder central seguirá controlado por el Congreso Nacional, con una participación minoritaria del MPLS y del resto de fuerzas políticas del norte y sur, a la espera de la celebración de elecciones dentro de 3 años, mientras que el gobierno del sur quedará en manos del MPLS con una participación del 15% para el régimen y otro 15% para el resto de fuerzas políticas. Respecto al estatuto de Jartum, se seguirá aplicando la sharía o ley islámica excepto a los no musulmanes. Las tres zonas marginadas (Abiyé, Nilo Azul y Montañas de Nuba), auténticos microcosmos sudaneses de importancia estratégica por el petróleo y los acuíferos cuya soberanía se han disputado ambas partes, tendrán un estatuto especial y aunque controladas por Jartum, la participación del MPLS será del 45%.

¿El futuro? Imperfecto e inestable por varios factores: la paz definitiva

se firmará al margen de la oposición política, encabezada por los dos grandes partidos tradicionales, *al-Umma* y el Unionista Democrático, a los que se ha unido el Congreso Popular dirigido por Hasan al-Turabi, cuya detención bajo la acusación de conspiración junto con un grupo de militares ha generado malestar en algunos círculos de la capital; las concesiones ideológicas que deberá hacer un régimen que durante años ha estado alentado un islam político; la desmovilización de grupos paramilitares del régimen que puede crear un grupo social de excluidos y cierta inestabilidad; el conflicto armado de la provincia occidental de Darfur que amenaza con extenderse... Los protocolos firmados incluyen prácticamente todos los aspectos de lo que deberá ser un nuevo Sudán, definen la identidad sudanesa, pero todo dependerá de su aplicación y del apoyo de los países donantes. La escenificación de la firma será en Kenia; el besamanos, en la Casa Blanca. ●

OTRA CUMBRE ÁRABE MÁS EN TÚNEZ

IGNACIO GUTIÉRREZ DE TERÁN

TÚNEZ fue escenario a finales de mayo de 2004 de la decimosexta cumbre ordinaria de la Liga de Estados Árabes. La reunión debía haberse celebrado en abril, pero unas discrepancias de última hora entre algunos dirigentes árabes sobre los puntos a debatir, entre ellos las reformas políticas del mundo árabe y la reestructuración de la misma Liga, obligaron a retrasarla. Como suele ser habitual en este tipo de reuniones árabes de máximo nivel, los resultados fueron más aparentes que efectivos. En esta ocasión, además, ha lla-



mado la atención la ausencia de numerosos reyes y presidentes árabes. Sólo siete asistieron a la sesión de clausura, mientras que algunos se limitaron a dejarse ver en la de inauguración. Este fue el caso del líder libio Muamar Gadafi, que, siguiendo la tónica general de sus últimas apariciones en este tipo de cumbres, causó cierto revuelo al salirse de la sala y organizar una rueda de prensa en la que criticó el discurso inaugural del secretario general, Amru Musa. Éste había criticado a su vez la falta de compromiso por parte de los estados miembros a la hora de cumplir con sus obligaciones financieras y potenciar los mecanismos de actuación de la Liga.

A las ausencias ya habituales de líderes longevos y crónicamente enfermos como el emir de Kuwait o el rey de Arabia Saudí, debe añadirse la de quienes creían que este encuentro no tenía mucha razón de ser en el momento actual. Algunos países alegaron razones de índole diplomático que tenían que ver, en el caso concreto del reino de Bahréin, con el hecho de que el presidente tunecino Zein ben Ali no había expresado su pésame al rey actual de Bahréin, Hamad ben Isa Al Jalifa, por la muerte de su padre, Isa ben Salmán Al Jalifa en 1999. La no asistencia del emir bahreiní enturbió en parte la ceremonia de traspaso de la presidencia de la Liga, que, precisamente, debía pasar de manos de Bahréin a Túnez.

De esta reunión, de la que nadie, ni los propios participante, parecían esperar gran cosa, han salido cuatro documentos y diecisiete resoluciones cuyo contenido mantiene el nivel habitual de las últimas cumbres árabes: muchas generalidades y poca concreción. Según apuntaron fuentes diplomáticas árabes y occidentales, los gobiernos aliados de EEUU, esto

es, la gran mayoría de los países árabes, aceptaron no condenar ni criticar de forma expresa la actuación de Washington en Iraq ni los últimos acontecimientos en Palestina tras la escalada bélica del ejército israelí en Gaza y sí centrarse en el asunto de las reformas y la lucha contra el terrorismo internacional. A cambio, la Casa Blanca se habría comprometido a retocar su proyecto democratizador de reformas para Oriente Medio (*Middle East Initiative*) de manera que las objeciones efectuadas por los dirigentes árabes fueran tenidas en cuenta. Hay que recordar en este sentido que determinados líderes árabes, con el egipcio Husni Mubarak a la cabeza, habían venido afirmando, desde principios de 2004, que los proyectos reformistas de EEUU para la región árabe no podían ni debían ser impuestos y que las reformas debían nacer desde dentro.

La administración Bush acabó tomando nota de estas observaciones y, por boca de sus representantes, ha dicho que *comprende* los temores de los dirigentes árabes, en especial los que se refieren a la posibilidad de que la democratización de la región permita el ascenso de las corrientes islamistas radicales. Por supuesto, la escasa repercusión de esta cumbre y la tibieza de su comunicado final contrastan con la grave situación económica, política y social que padece el mundo árabe. Dejando a un lado la cuestión palestina y la ocupación de Iraq, esta cumbre no ha servido para delimitar una política común respecto a otro de los grandes retos a los que habrán de enfrentarse los países árabes, en especial los de Oriente Medio: el efecto de las sanciones económicas decretadas por EEUU, en abril-mayo de 2004, contra Siria. El comunicado final hablaba de "solidaridad árabe con Siria" pero nada más. Diversas fuentes han

vas posibles ante el 58% del electorado que participó en las elecciones (sólo el 17% en la Kabylia). También es cierto que Buteflika se ha confirmado como un consumado maestro en la utilización de la escena de los medios públicos de comunicación (la televisión sigue siendo monopolio del estado) y en el curso de la reforma. Además, ha sabido gestionar el fondo de casi 7.000 millones de dólares para inversiones del Plan de Apoyo al Relanzamiento Económico 2001-2004, única iniciativa económica de alcance de todo su mandato, como una palanca de distribución de favores y consolidación de alianzas con las autoridades locales. Como declaró el opositor Sid Ahmed Ghazali, líder del prohibido Frente Democrático, “[...] el crimen, esta vez, fue casi perfecto”.

Sin embargo, pese a la mejora innegable de la situación de seguridad experimentada en los últimos tres años, la guerra civil que asoló el país de 1992 a 2002 parece haberse dejado atrás sin resolver ni uno solo de los problemas económicos y sociales que la causaron. Es más, los sucesivos gobiernos Buteflika — cuatro en cinco años— no han sido capaces de aprovechar la coyuntura económica internacional extraordinariamente favorable para sus intereses para transformar en bienestar social la riqueza sobrevenida por el aumento de los precios internacionales del petróleo: mientras Argelia ha conseguido acumular desde 1999 unas reservas de divisas de más de 34.000 millones de dólares (casi dos terceras partes de su PIB anual, más de 1.000 dólares por habitante, y por primera vez en más de dos décadas

superiores a su deuda externa), el 40% de su población, 14 millones de personas, viven por debajo del umbral de pobreza con menos de 2 dólares diarios y la tasa de desempleo sigue por encima del 25% (en un país donde trabajan en la economía formal menos de 6 de sus 30 millones de habitantes)².

Aun así, el signo de los cinco próximos años de presidencia es a todas luces el de la continuidad y el continuismo: Buteflika apenas ha introducido modificaciones en las principales carteras de su equipo de gobierno, y los únicos proyectos que han trascendido hasta ahora de las intenciones para su segundo mandato (en la campaña electoral no hubo nada parecido a un programa) son, significativamente, una Ley de Concordia Civil II y un Plan de Apoyo al Relanzamiento Económico II. En la calle, las revueltas populares, manifestaciones de protesta y episodios de violencia por todo el país también continúan, hasta el punto de haberse convertido en el principal mecanismo de interacción entre la población y el Estado. Los motivos son siempre los mismos: asignación de viviendas sociales, puestos de trabajo, abusos de las autoridades (*hogra*).

En cualquier caso, no cabe duda de que estas elecciones han reforzado a Buteflika. Por un lado, le han otorgado una legitimación ante la comunidad internacional que permite a sus aliados hacer la vista gorda ante la falta de democracia en Argelia y consolidan su autonomía frente al Ejército, que le designó para su primer mandato. Además, se ha desembarazado de uno de los escasos políticos relativamente jóvenes con proyección nacional (Ali Benflis

2 Para un análisis en profundidad de la situación y la política económica argelina véase Martín, I. (2003): *La política económica en Argelia (1999-2000) ¿Hacia una solución económica a la crisis?*, Documento de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid (<http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/03-004/03004.pdf>).

desde la independencia) y manifestar la solidez de sus lazos con Buteflika e incluso proponer la elevación de las relaciones institucionales entre los dos países al nivel que tienen nada menos que las relaciones Francia-Alemania. El presidente Bush no se quedó atrás en sus muestras de deferencia, y por segunda vez Buteflika fue uno de los escasos mandatarios de países subdesarrollados invitados especiales de la cumbre del G-8 celebrada este año en EEUU. España parece haberse apuntado a este carrusel: el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, viajó a Argel poco después de jurar su cargo, y lo mismo tiene previsto hacer el nuevo presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a mediados de julio.

De hecho, son precisamente estos lazos privilegiados en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo los que le permiten al régimen argelino mantener la inmunidad ante las presiones internacionales para que impulse las reformas económicas y la transición hacia una economía de mercado —Argel, por ejemplo, no parece tener prisa por ratificar su Acuerdo de Asociación con la UE suscrito en 2002, cuyo principal objetivo parecía ser simplemente poner fin al “embargo moral” internacional del régimen³. Por otro lado, sus saneadas finanzas le han permitido reducir considerablemente su deuda externa y mantenerse al abrigo de los planes de ajuste estructural del FMI que dictaron su política económica de 1994 a 1998. En este contex-

to de replanteamiento de sus alianzas a cambio de una mayor autonomía interna, no sería demasiado extraño que Argelia estuviera dispuesta a buscar alguna solución al conflicto del Sáhara Occidental en los próximos años, aun a costa de sus hasta ahora aliados del Frente Polisario.

Sea como fuere, su solvencia financiera y su cuidada imagen de “aliado fiel y fiable” otorgan al gobierno de Buteflika cierta impunidad ante su falta de modelo de desarrollo y de política social, e incluso ante retrocesos en materia de libertades. Así lo pone de manifiesto el elocuente silencio ante el recrudecimiento de la persecución contra la prensa nacional y extranjera que se ha producido en las últimas semanas de junio, con dos directores de diarios nacionales críticos encarcelados y la suspensión por tiempo ilimitado de las actividades en el país de la cadena de televisión árabe *al-Yazira*, que ponen en peligro una de las prensas escritas más libres y críticas del mundo árabe.

No parece, en todo caso, que el presidente Buteflika tenga entre sus prioridades para este segundo mandato aprobar ninguna de las dos auténticas asignaturas pendiente de Argelia desde su independencia en 1962: la reconciliación económica nacional y la democratización⁴. Sin que nadie se moleste en justificar por qué sigue siendo necesario una vez que parece haberse vencido a la guerrilla islamista, el estado de urgencia sigue vigente en el país desde el 9 de febrero de 1992. ■

3 Véase “Acuerdo de Asociación UE-Argelia: ¿inserción económica o reinserción política?”, de Iván Martín, *Nación Árabe*, núm. 47, Invierno 2002, pp. 33-39 y http://www.algeria-watch.org/farticle/analyse/martin_2002.htm.

4 Véase el informe “¿Adónde va Argelia? Un régimen contra su pueblo”, *Nación Árabe*, núm. 46, Invierno 2002.